



La salvaguarda del patrimonio inmaterial como acuerdo social

Propuesta metodológica para la
elaboración de planes colaborativos
de salvaguarda del PCI



Junta de Andalucía

Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

CONSEJERÍA DE CULTURA
Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Consejera de Cultura y
Patrimonio Histórico
Patricia del Pozo Fernández

Viceconsejera de Cultura y
Patrimonio Histórico
María Esperanza O'Neill Orueta

Secretario General de
Patrimonio Cultural
Juan Cristóbal Jurado Vela

Director General de Patrimonio
Histórico y Documental
Miguel Ángel Araúz

Director del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH)
Juan José Primo Jurado

Edita: Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.
Junta de Andalucía

Proyecto financiado por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte,
Gobierno de España, con cargo
a las ayudas, en régimen de
concurcencia competitiva, para
proyectos de salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial
correspondientes al año 2019

© de la edición:
Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.
Junta de Andalucía

Coordinación de la edición:
Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico

COORDINACIÓN CIENTÍFICA
Gema Carrera Díaz, IAPH

AUTORÍA
Rívia Ryker Bandeira de Alencar
Gema Carrera Díaz
Eva Cote Montes
Cristina Cruces Roldán
Aniceto Delgado Méndez
Isabel Durán Salado
David Florido del Corral
Andrés Forero Rueda
Carlos García Bayona
Ana María García López
Sara González Cambeiro
Cristina Isla Palma
Luis Pablo Martínez Sanmartín
Mónica Ortiz Sánchez
Teresa Pacheco Albino
Fuensanta Plata García
Victoria Quintero Morón
Cristina Sánchez Carretero
Ana Saraiva
María Pía Timón Tiemblo

EQUIPO EDITORIAL IAPH
María Cuéllar Gordillo, Cinta
Delgado Soler, Carmen Guerrero
Quintero

APOYO EDITORIAL
Deculturas S. Coop. And.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Manolo García nz



Esta obra está bajo una licencia
Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 España
Creative Commons.

Usted es libre de copiar, distribuir
y comunicar públicamente
la obra bajo las condiciones
siguientes:

- Reconocimiento. Debe
reconocer los
créditos de la obra de la manera
especificada por el autor o el
licenciador.

- No comercial. No puede utilizar
esta obra para fines comerciales.

- Sin obras derivadas. No se
puede alterar, transformar o
generar una obra derivada a
partir de esta obra.

Al reutilizar o distribuir la obra,
tiene que dejar bien claro los
términos de la licencia de
esta obra. Alguna de estas
condiciones puede no aplicarse
si se obtiene el permiso del
titular de los derechos de autor.
Los derechos derivados de usos
legítimos u otras limitaciones
reconocidas por ley no se ven
afectados por lo anterior.

La licencia completa está
disponible en:

[http://creativecommons.org/
licenses/bync-nd/3.0/es/](http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/3.0/es/)

AÑO DE EDICIÓN: 2021
ISBN: 978-84-9959-395-1

La salvaguarda del patrimonio inmaterial como acuerdo social

Propuesta metodológica para la
elaboración de planes colaborativos
de salvaguarda del PCI

Presentación

Casi desde sus inicios, ya en la década de los 90 del siglo XX, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, incorporó, en su Centro de Documentación y Estudios, la perspectiva antropológica en las labores técnicas e investigadoras sobre patrimonio, labor que se hizo especialmente fructífera a partir de la *Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial* de UNESCO (París, 2003).

Así, la elaboración del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía (2008-2014) constituyó para la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y para el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España una de las grandes aportaciones metodológicas realizadas por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en el ámbito del conocimiento y salvaguarda de este patrimonio, incorporándose su propuesta metodológica al Plan Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobado por el Consejo de Patrimonio Histórico en 2011.

En la misma línea, la reciente creación de la Red de Agentes Informantes del patrimonio cultural de Andalucía (IAPH, 2020) garantiza la continuidad y actualización participativa de este instrumento de conocimiento que aporta al patrimonio cultural de Andalucía más de 1800 expresiones culturales difundidas a través de los más variados medios de difusión, incluyendo las dos principales herramientas fundamentales de difusión y publicación de los trabajos realizados en el Centro de Documentación y Estudios: la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía y el Repositorio de Activos Digitales.

Por otra parte, uno de los objetivos del Atlas es detectar los riesgos y problemáticas que afectan a estas actividades con la intención de poner en marcha posibles planes de salvaguarda que exigen una coordinación entre

los protagonistas de este patrimonio, la ciudadanía y un marco institucional articulado. La evolución lógica de este proyecto, siguiendo la trayectoria desarrollada en el IAPH sobre el patrimonio inmaterial desde la antropología social, ha sido la de profundizar en el diseño colaborativo de planes de salvaguarda.

Con esta intención, el IAPH formuló el proyecto PES PCI: Guía metodológica para el diseño de Planes Especiales de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, cofinanciado por el Ministerio de Cultura y Deporte, cuyos resultados se muestran en la presente monografía. Conscientes de que la salvaguarda del patrimonio inmaterial depende de una gran variedad de actores sociales y de la coordinación de todos ellos, esta obra colectiva pretende sentar las bases metodológicas con el soporte técnico, conocimientos y agentes necesarios.

Por tanto, me complace presentar esta publicación, cuyo objetivo final es dotar a la administración cultural y a la sociedad de una herramienta versátil y exportable a distintos ámbitos patrimoniales y territoriales que garanticen el necesario acuerdo social e institucional para la salvaguarda de las manifestaciones y expresiones del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo así a la diversidad cultural y al desarrollo sostenible, inclusivo, equitativo y estable, especialmente en Andalucía.

Índice

p. 09

Introducción

Puntos de partida y estructura de la propuesta metodológica de los planes de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial como un acuerdo social

Gema Carrera Díaz

SESIÓN 1. LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

p. 19

Capítulo 1

Medio siglo y una normativa internacional de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial: entre la diversidad cultural y el “mercado”

Gema Carrera Díaz

p. 52

Capítulo 2

Los planes de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en Brasil

Rívia Ryker Bandeira de Alencar

p. 75

Capítulo 3

Los Planes Especiales de Salvaguardia y las metodologías participativas para la gestión del patrimonio cultural inmaterial en Colombia

Ana María García López,
Andrés Forero Rueda

p. 94

Capítulo 4

El inventario del patrimonio cultural inmaterial en Portugal: retrospectiva y retos para su conservación

Teresa Pacheco Albino,
Ana Saraiva

SESIÓN 2. LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL ÁMBITO ESTATAL Y AUTONÓMICO EN EL ESTADO ESPAÑOL

p. 111

Capítulo 5

La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en España. Una visión desde la legislación estatal

Mónica Ortiz Sánchez

p. 132

Capítulo 6

El Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial: una metodología compartida

María Pía Timón Tiemblo,
Sara González Cambeiro

p. 150

Capítulo 7

Aproximación al análisis comparado de las medidas de salvaguardia del PCI en la legislación autonómica española

Luis Pablo Martínez Sanmartín

SESIÓN 3. LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN ANDALUCÍA

p. 171

Capítulo 8

Las inscripciones del patrimonio cultural inmaterial en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Alcance y cauces de participación social para su salvaguarda

Fuensanta Plata García

p. 195

Capítulo 9

El inventario como instrumento de salvaguarda. El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. “Un viaje de ida y vuelta”

Gema Carrera Díaz

p. 228

Capítulo 10

El patrimonio cultural inmaterial de Andalucía en las listas de la UNESCO. Una mirada retrospectiva

Cristina Cruces Roldán

p. 249

Capítulo 11

Catálogo de riesgos, medidas y buenas prácticas en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

Eva Cote Montes,
Cristina Isla Palma

SESIÓN 4. DISEÑO DE UNA PROPUESTA METODOLÓGICA COLABORATIVA DE PLAN DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

p. 280

Capítulo 12

¿Qué debe ser un plan de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial?

Gema Carrera Díaz,
Fuensanta Plata García

p. 301

Capítulo 13

La salvaguarda del PCI: trenzando acompañamiento etnográfico y procesos participativos

Victoria Quintero-Morón,
Cristina Sánchez-Carretero

p. 317

Capítulo 14

Todas las voces. La elaboración de mapas de actores para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

David Florido del Corral

p. 336

Capítulo 15

La documentación gráfica, sonora y audiovisual en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

Aniceto Delgado Méndez

p. 356

Capítulo 16

Participación y gestión patrimonial en el IAPH: un taller participativo sobre el alcance de un plan especial de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

Isabel Durán Salado

p. 368

Referencias bibliográficas y fuentes documentales

p. 414

Carta de Andalucía para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial



**Medio siglo
y una normativa
internacional de
salvaguarda del
patrimonio cultural
inmaterial: entre la
diversidad cultural
y el “mercado”**

Gema Carrera Díaz, Centro de
Documentación y Estudios, Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)

1. Introducción

El objeto de este capítulo es analizar las formas de abordar, gestionar y salvaguardar el denominado “patrimonio cultural inmaterial” (PCI) en el ámbito internacional a lo largo de la historia y en el momento actual. Un análisis crítico de esta producción nos permitirá comprender las geopolíticas pretéritas y actuales de los procesos patrimoniales (Kirshenblatt-Gimblett 2004; Santamarina Campos 2013). Parte de los documentos, recomendaciones, cartas y conferencias que analizaremos pueden considerarse antecedentes de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (UNESCO 2003), que se viene gestando lentamente desde la propia génesis de la UNESCO y se hace realidad medio siglo después.

A pesar de una visión crecientemente crítica sobre los objetivos explícitos y latentes de las políticas culturales en torno al PCI, este concepto también permite la defensa de una parte de la cultura y de sus creadores antes invisibles y minusvalorados. Ambos discursos, aparentemente incompatibles, se perciben ya en la producción de documentos y normas internacionales al respecto. Los discursos irán cambiando a medida que avanza, imparable, la globalización del mercado, oscilando desde las visiones más críticas (años setenta) e impregnándose progresivamente de los discursos mercantilistas y economicistas de la cultura a medida que avanza el siglo XX.

“Significativamente, buena parte de los elementos culturales que se instrumentalizan más directamente en los discursos político-culturalistas étnicos van a estar extraídos de los contenidos de lo que denominamos patrimonio etnológico. Y sin embargo, en una aparente paradoja que no lo es tal de acuerdo con la propia lógica del mundo en que vivimos, también asistimos a una reinterpretación de este patrimonio etnológico en clave de mercado, en la que las propias ‘identidades’ se han convertido en un recurso más al asociarse a unos particularismos-autenticidades que son crecientemente demandados/ofertados en un mercado turístico en el que el patrimonio es visto como un recurso que ha de adaptarse a esta demanda” (Agudo Torrico 2005, 197).

El desarrollo a partir de los años cincuenta de la teoría de los bienes culturales pone en cuestión el valor intrínseco de los mismos. Su valor no proviene

tanto de su materialidad, rareza, antigüedad, prestigio de autor o belleza estética, como de su valor simbólico como testimonio de una cultura presente o pasada (Comisión Franceschini, 1964-1967). La UNESCO incorporará este concepto en la Convención de 1972 y el Estado español lo hará con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y en sus ulteriores normativas autonómicas. Así, se comienza a plasmar en las Constituciones y legislaciones europeas el reconocimiento y reglamentación de la tutela y custodia pública de los bienes culturales como bienes colectivos. Y ello se hace necesario dados los fuertes y rápidos cambios socioeconómicos producidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a partir del poder destructivo del propio conflicto bélico y de la percepción de riesgo que el progreso y la modernidad provocan sobre los bienes culturales. Este proceso, unido al liberalismo económico que rige la globalización del mercado, lleva a la mayor y más rápida pérdida de arquitectura vernácula, tradiciones

Procesión, Granada, Nicaragua, 2010 (Gema Carrera Díaz)



culturales, paisajes, sistemas de subsistencia y formas de vida, etc., esto es, a la desaparición o aguda transformación —hasta el punto de suspender o dificultar su reproducción social— de distintos elementos clave de sistemas culturales diseminados por el mundo.

Coincidiendo con Agudo Torrico (2003), las modificaciones sustanciales del concepto de patrimonio cultural que se dan en este periodo posbélico son consecuencia de la combinación de tres factores o dinámicas generados por diferentes tipos de actores que interactúan entre sí, produciendo sus respectivas acciones un efecto de retroalimentación sobre las de los otros: movimientos sociales, políticas culturales y desarrollo de la antropología social. Todos ellos actúan contemporáneamente y su interrelación tiene como resultado una de las transformaciones más interesantes en el campo del patrimonio cultural a mitad del siglo XX: la afirmación del carácter simbólico y referencial del patrimonio o su capacidad para representar simbólicamente la identidad de grupos sociales desde posiciones subalternas, así como la importancia de los procesos sociales y culturales por encima de los objetos producidos y espacios en los que se producen (patrimonio cultural inmaterial), todo ello acompañado de la incorporación de la antropología social a la gestión patrimonial, ahora menos vertical y con una mayor participación social, tantas veces instrumentalizada (Prats Canals 1997, 22; Quintero-Morón 2005; Moreno Navarro 2006).

La campaña de salvaguarda de los templos de Abu Simbel en Egipto en 1960 realizada por la UNESCO fue el inicio para la creación de la primera Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (UNESCO 1972a). Desde las primeras inscripciones en 1978, el grueso de los bienes en la Lista del Patrimonio Mundial eran europeos y, tipológicamente, predominaban los “inmuebles de valor excepcional”, atendiéndose fundamentalmente a inmuebles, ciudades, yacimientos y obras de arte desde las perspectivas disciplinarias de la arqueología, la arquitectura y la historia del arte.

No obstante, a lo largo de los treinta años sucesivos, se ha intentado evitar esta tendencia, como evidencian las cartas, recomendaciones y convenciones emitidas por la UNESCO hasta desembocar en la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003.

En 1952, la UNESCO encarga al antropólogo Lévi-Strauss un documento que, en el contexto de posguerra, sentaría las bases teóricas para la lucha contra el racismo: *Raza e Historia* (Lévi-Strauss 1952/1996, 6). Con este texto afirmaba que las políticas culturales internacionales debían negar cualquier supremacía racial-cultural, enfatizándose el valor y la riqueza de la diversidad cultural, siendo esta la que debe preservarse como patrimonio cultural de la humanidad (Lévi-Strauss 2001, 159).

Desde muy temprano, la UNESCO hizo referencia a la necesidad de salvaguardar y proteger los elementos “inmateriales” de la cultura, uniendo este imperativo a la necesidad de relacionar las políticas culturales con las políticas internacionales para el “desarrollo económico”: “la dimensión cultural del desarrollo o la dimensión económica de la cultura” (UNESCO 1970). Este aspecto se hace evidente en casi todos los preámbulos o introducciones de informes sobre políticas culturales, convenciones, documentos o declaraciones desde 1970.

No será hasta 1994 cuando se emita la Estrategia global para una Lista del patrimonio mundial equilibrada, representativa y creíble (UNESCO 1994)¹, tras identificar el patrimonio escasamente representado y revisar los criterios de inscripción en la lista. Estrategia que no obtuvo los resultados esperados.

2. La influencia americana y las conferencias intergubernamentales sobre las políticas culturales: identidad cultural y desarrollo

En el periodo 1970-79 la UNESCO organizó una serie de conferencias intergubernamentales sobre políticas culturales. La primera fue la Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales (UNESCO 1970), celebrada en Venecia. Más tarde, la conferencia intergubernamental se desarrolló en América Latina: en Bogotá tuvo lugar la Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en América Latina y el Caribe (en adelante AMERICANCULT) (UNESCO 1978a). Se enfatizaría la necesidad de vincular la cuestión del desarrollo cultural con la idea de la mejora global de la vida de los pueblos, incorporando al

debate la cuestión central de la identidad cultural y la cultura. Sorprenden la contemporaneidad, profundidad y calado de las reflexiones que en ella se plantearon, aunque las ideas que tan claramente se expresaron tardaron mucho tiempo en plasmarse en un documento jurídico internacional.

“La cultura no puede ser considerada como algo añadido al hombre. No es una hora en la vida del hombre. Es el hombre mismo. La presencia del hombre en la naturaleza”. Algunos delegados definieron la cultura en términos históricos y sociales y se manifestaron contrarios a lo que llamaron “la mitificación de la cultura, simplemente cultista, elitista, que se inscribe en una estructura de desigualdades sociales” (UNESCO 1978a, 8).

Los debates sobre el concepto de “desarrollo” fueron igualmente críticos. Cultura y desarrollo debían entenderse en términos dialécticos. El desarrollo no puede basarse en una sola tendencia o concepción del mundo y la cultura no puede enfocarse en función del desarrollo. El concepto de desarrollo vigente y su aplicación había generado graves desigualdades sociales en la región, favoreciendo solo a unas minorías, causando el agotamiento de los recursos en la región y provocando su extrema vulnerabilidad. El modelo de desarrollo latinoamericano debía permitir “un estilo de vida hecho a la medida del hombre americano, de su cultura y su geografía, de sus anhelos de paz, de libertad y de dignidad” (UNESCO 1978a, 82). Se denunciaron las consecuencias de la globalización y la homogeneización cultural que perseguían las empresas transnacionales, su control de los medios de comunicación, la falta de neutralidad de las mismas y la necesidad de políticas culturales que contrarrestaran estas tendencias (UNESCO 1978a, 10).

Otra de las aportaciones de este debate fue el cuestionamiento del Estado como garante de la salvaguarda de la cultura en un contexto de crisis de este modelo político en América Latina y de aparición de movimientos sociales con planteamientos reivindicativos en el ámbito de la identidad cultural:

“Un delegado precisó que ningún Estado ha creado nunca una cultura y que más bien el Estado es un producto cultural. Lo que tradicionalmente se llama cultura se ha creado o contra el Estado o al margen (...) destacó la importancia histórica de las que calificó como culturas subterráneas, muchas veces proscritas y perseguidas” (UNESCO 1978a, 10).



Encuentro centroamericano sobre inventarios de bienes culturales, Granada, Nicaragua, 2008
(Gema Carrera Díaz)

Se aportaron visiones y puntos de vista de gran contemporaneidad también en el ámbito de la participación social (individual y colectiva) en las cuestiones relativas a las políticas culturales, reivindicando con particular énfasis la participación de las comunidades indígenas. El Estado debe realizar la planificación del desarrollo de la cultura y no la creación de la cultura.

Por otro lado, se manifestó una visión de la preservación del patrimonio cultural muy cercana al concepto contemporáneo de *salvaguarda* desde una visión dinámica del mismo:

“En lo que se refiere a la preservación del patrimonio cultural un amplio consenso se puso en evidencia en considerar a ese patrimonio no solamente con criterios conservacionistas, cuya preservación está dirigida únicamente a una función histórica y documental, sino que se estableció claramente que

el patrimonio cultural es toda la herencia social en permanente y dinámica elaboración, es decir, toda la creación del hombre” (UNESCO 1978a, 11).

Más tarde, en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (en adelante MONDIACULT) (UNESCO 1982), se rechazó unánimemente toda jerarquía y discriminación entre culturas y se defendió la diversidad cultural y la identidad como “patrimonio cultural” y como principio rector de las políticas culturales, tal y como se recogió en la “Parte IV” del “Informe Final”, titulada “Declaración de México sobre las Políticas Culturales”:

“1. Cada cultura representa un conjunto de valores único e irremplazable, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar presente en el mundo. 2. La afirmación de la identidad cultural contribuye, por ello, a la liberación de los pueblos (...). 4.

Fiesta del alarde. Cuenca. Ecuador, 2010 (Gema Carrera Díaz)



Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad. La identidad cultural de un pueblo se renueva y enriquece en contacto con las tradiciones y valores de los demás” (UNESCO 1982, 43-44).

La Conferencia entendía el “desarrollo” como satisfacción de las aspiraciones culturales y espirituales de los seres humanos, como capacidad de cada individuo y cada pueblo de informarse, aprender y comunicar sus experiencias, como forma de fortalecer la soberanía, la identidad y la independencia de los pueblos.

Los usos culturales presentes tienen tanta validez como los antiguos y las políticas culturales no debían depender solo de los gobiernos, sino también de la participación de las comunidades y la sociedad civil. Se acentuaba de nuevo la cuestión de la participación social en la gestión patrimonial, y así se señaló en el principio número 20 del apartado “Cultura y democracia” de la citada Declaración de México:

“Es preciso descentralizar la vida cultural, en lo geográfico y en lo administrativo, asegurando que las instituciones responsables conozcan mejor las preferencias, opciones y necesidades de la sociedad en materia de cultura. Es esencial, en consecuencia, multiplicar las ocasiones de diálogo entre la población y los organismos culturales” (UNESCO 1982, 45).

Una definición amplia de cultura sirvió para justificar la ampliación del concepto de patrimonio abarcando modos de vida y las formas de expresión por los que se transmiten los valores culturales. En el principio número 23 del apartado “Patrimonio cultural” se nombró a las obras “no materiales” que expresan la creatividad de un pueblo como una forma de patrimonio cultural. Se consideraba que para lograr un desarrollo equilibrado era imprescindible la integración de los factores culturales en las estrategias para alcanzarlo; en consecuencia, tales estrategias deberían tomar en cuenta siempre la dimensión histórica, social y cultural de cada sociedad:

“El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y *no materiales* que expresan

la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas” (UNESCO 1982, 45).

Pero, al mismo tiempo que se declaraban estas legítimas intenciones, la Conferencia defendía con igual ímpetu a las industrias culturales, por lo que la mercantilización de la cultura parece una constante desde las más tempranas y solidarias políticas culturales.

3. La Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular

En 1989 la Conferencia General de la UNESCO adoptó en su 25.^a reunión la Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular. Tres décadas de reuniones, convenciones, políticas, cartas, acuerdos dieron como resultado un documento jurídico, no vinculante, que aconsejaba acopiar, archivar, inventariar y recopilar información sobre las manifestaciones culturales “populares” y “tradicionales” al modo que ya lo venían haciendo, de forma no institucionalizada, los folcloristas y antropólogos en gran parte del mundo².

Explícitamente, en la Recomendación se decía que “la cultura tradicional y popular forma parte del patrimonio universal de la humanidad”. La definición de cultura tradicional y popular suponía la superación teórica del materialismo y monumentalismo imperante en la construcción del patrimonio (Santamarina Campos 2013). Mediante treinta y siete recomendaciones agrupadas en seis tipos de medidas —identificación, conservación, salvaguardia, difusión, protección y cooperación— se alentaba a los gobiernos a impulsar investigaciones sobre cultura popular (Aikawa-Faure 2009). La mayor parte de las medidas estaban dirigidas a la normalización y estandarización de un sistema de identificación, categorización y registro de las expresiones como venían haciendo desde los estudios folcloristas; así como al fortalecimiento o creación de instituciones (museos, archivos) que albergaran, conservaran y difundieran esta información y permitieran su acceso y transmisión a todo tipo de público y garantizaran su protección. Hacen referencia también a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)³ y a la necesidad de regular la propiedad intelectual

Mercado, Otavalo, Ecuador, 2008 (Gema Carrera Díaz)





Danza, Granada, Nicaragua, 2010 (Gema Carrera Díaz)

de este tipo de creaciones colectivas. No obstante, no se crea ningún tipo de compromiso de fuerza legal en este sentido.

El documento se limitó a ser meramente orientativo y no vinculante, aunque marcó las legislaciones sucesivas de patrimonio cultural desarrolladas en los años noventa en lo referente al patrimonio etnológico, limitándose estas a insistir en la necesidad de documentar este patrimonio cultural.

Según Arizpe (2006), partiendo de una visión estática de la tradición y no de esta entendida como un proceso siempre vivo, “el término ‘tradición’ opaca las raíces contemporáneas o multiculturales (...). Peor aun, al omitir el contexto que le confiere significado a los objetos y actividades rituales y festivas, el concepto ‘folclor’ fragmenta las prácticas culturales hasta volverlas solo

piezas de museo". Según esta autora, una de las razones por las cuales se desestimó la Recomendación de 1989 se debió a que copiaba las medidas adoptadas para proteger "objetos" inmuebles o muebles. Ella participó en la reunión de la UNESCO en Turín de 2001 en la que se definió por primera vez el PCI y sus ámbitos de salvaguarda. "Damos énfasis a la gama completa de actividades que abarca una determinada práctica o evento en la dinámica de la creación, recreación y transmisión del patrimonio cultural intangible" (Arizpe 2006, 24).

En la Conferencia Internacional de Washington⁴, celebrada en junio de 1999, se analizaron los resultados de esta Recomendación a escala regional y se acordó la necesidad de abordar en un instrumento nuevo o revisado, atendiendo en particular a las cuestiones terminológicas, al tipo de definiciones y a las medidas de salvaguarda empleadas.

4. La orientalización de la UNESCO. Una nueva concepción del mundo y el nuevo orden económico internacional. La Conferencia de Nara de 1994

Durante los años noventa, tras la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, se intensifican los procesos de homogeneización cultural y aumenta la consciencia de los procesos de transformaciones globales. Esta situación hizo que la UNESCO llevara al primer plano de su agenda el tema de "lo inmaterial" como una categoría nueva y pretendidamente relativista, no eurocentrista. Pero, al mismo tiempo, las políticas culturales se iban sometiendo de modo mucho más evidente a las reglas del mercado. Una nueva convención, después de más de cincuenta años en torno al tema, empezó a convertirse no solo en un objetivo cultural, sino en una estrategia económica y política de carácter global. Una nueva geopolítica patrimonial surge de la mano de un nuevo orden económico mundial. En 1992 se creaba la nueva Sección de PCI de la UNESCO, cuya primera presidencia ostentó la japonesa Noriko Aikawa-Faure (1992-2001).

La perspectiva asiática cambió la forma de entender lo material y lo inmaterial. La Conferencia de Nara (UNESCO, ICOMOS e ICCROM 1994) resultaría un

paso fundamental en la conceptualización posterior del PCI como ruptura con el concepto de autenticidad que propugnaba la Carta de Venecia (ICOMOS 1964). La perspectiva oriental, donde objetos y conocimientos se renuevan constantemente, choca de frente con el valor de autenticidad occidental construido sobre la idea estática de permanencia mediante la lucha contra la degradación con medidas de recuperación o restauración de reliquias del pasado. La reconstrucción periódica de los templos *shinto* marcaría un hito: el objeto de salvaguarda es la transmisión del saber que hace posible la perpetuación siempre actualizada de sus construcciones. Así, en su apartado 11, la Conferencia recoge lo siguiente:

“No es posible realizar juicios de valor o autenticidad con un criterio fijo, por el contrario, el respeto debido a todas las culturas requiere que el patrimonio cultural sea considerado y juzgado dentro del contexto cultural al cual pertenece” (UNESCO, ICOMOS e ICCROM 1994).

En 1993, la UNESCO creó el programa de los “Tesoros Humanos vivos”, a petición de la República de Corea, para incentivar a los transmisores, actores y creadores para que conservaran, transmitieran sus conocimientos y mejoraran sus habilidades y capacidades para defenderse de los cambios que comporta la globalización. En 1997 la División del Patrimonio Cultural y la Comisión Nacional de Marruecos para la UNESCO celebraron en Marrakech una Consulta Internacional sobre la preservación de los espacios culturales populares en la que se decidió crear el programa “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad”, con el objetivo de sensibilizar, salvaguardar; evaluar y documentar este tipo de patrimonio cultural mediante inventario, medidas jurídicas y administrativas; y fomentar la participación de artistas tradicionales e intérpretes locales en la definición y revitalización de su PCI.

La idea de excelencia, tan bien radicada en el imaginario colectivo a través de términos como “tesoros” u “obras maestras”, predomina en estos dos programas. Esta idea fue cuestionada posteriormente por la Convención de 2003 porque se considera inapropiada para expresiones culturales que son producto de prácticas culturales colectivas, muchas veces amenazadas por considerarse “ordinarias”, con escaso valor estético o de escasa espectacularidad, y por alimentar una especie de competitividad “patrimonial” entre sujetos autorrepresentados y convertidos en objetos (Bortolotto 2008; Henríquez Sánchez 2011).



Elaboración de pan, Cayambé, Ecuador, 2008 (Gema Carrera Díaz)

5. La Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (UNESCO 2003). La antropologización del patrimonio

Tres décadas después de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural llegaría la segunda Convención UNESCO. La Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial fue aprobada por la Asamblea General de la UNESCO el 16 de octubre de 2003 y entró en vigor en abril de 2006 tras haber sido ratificada por 30 Estados, entre ellos, España. Actualmente, cuenta ya con 180 Estados miembros, por lo que su proceso de ratificación ha sido muy acelerado. En junio de 2008 se aprobaron sus Directrices Operativas por parte de la II Asamblea General de la UNESCO.



Mercado de Granada, Nicaragua, 2010 (Gema Carrera Díaz)

5.1. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial según la Convención?

Podríamos afirmar que la definición de PCI de la Convención es la “cultura” en sentido antropológico reconocida en un orden normativo con rango de tratado internacional y que debe servir como instrumento útil para tutelar la diversidad cultural de la humanidad. El artículo 2.1. describe el PCI de la siguiente forma:

“Usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento



Venta de cal en la medina de Tetuán, Marruecos, 2014 (Gema Carrera Díaz)

de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” (UNESCO 2003, 2).

Algunas de las características del PCI son: el valor de continuidad y transmisión frente al de autenticidad; la representatividad frente a la excelencia o singularidad; la importancia de la comunidad o colectivos sociales y de los procesos frente a los objetos; el carácter siempre vivo y dinámico, la relación entre lo material e inmaterial, la importancia de las comunidades y los grupos protagonistas en su gestión y salvaguarda; la importancia de la transmisión, del valor identitario, y de la diversidad cultural (Bortolotto 2008; Carrera Díaz 2009, 182, 2016).

Por “inmaterial” no se entiende ausencia de materialidad, ni se considera un atributo exclusivo de este patrimonio. Se trata de un patrimonio vivo, cuya

continuidad depende de las mujeres y hombres que lo generan, transmiten, heredan y mantienen, transformándolo y adaptándolo a sus propios contextos culturales y visiones del mundo. Destacan sus valores sociales (sistemas de gobernanza, sociabilidad, bienestar, calidad de salud, seguridad alimentaria) y su contribución a la sostenibilidad ambiental y a la resiliencia de los socioecosistemas (sistemas de cultivo tradicionales, sistemas de riego, biodiversidad).

Por otro lado, otra de las modificaciones en la asignación de valor que produce este concepto es la reivindicación del valor de “representatividad” frente al de “excelencia o excepcionalidad”. La definición rechaza también el valor universal excepcional que era el fundamento de la Convención de 1972, así como cualquier tipo de jerarquía entre expresiones culturales. Cualquier expresión del PCI es importante para quienes las practican, porque otorga a los mismos un sentimiento de pertenencia y continuidad.

La novedad de esta perspectiva está en el hecho de que la salvaguarda depende del mantenimiento y la continuidad de la creatividad de sus detentadores. Esto implica que, frente a la conservación en sentido estricto, fosilizadora de formas, reglas y significados, se debe fomentar el dinamismo cultural, la no intervención en esta dinámica y su máximo respeto, reconociendo en este patrimonio su vivacidad y su apertura a ulteriores cambios y renovaciones.

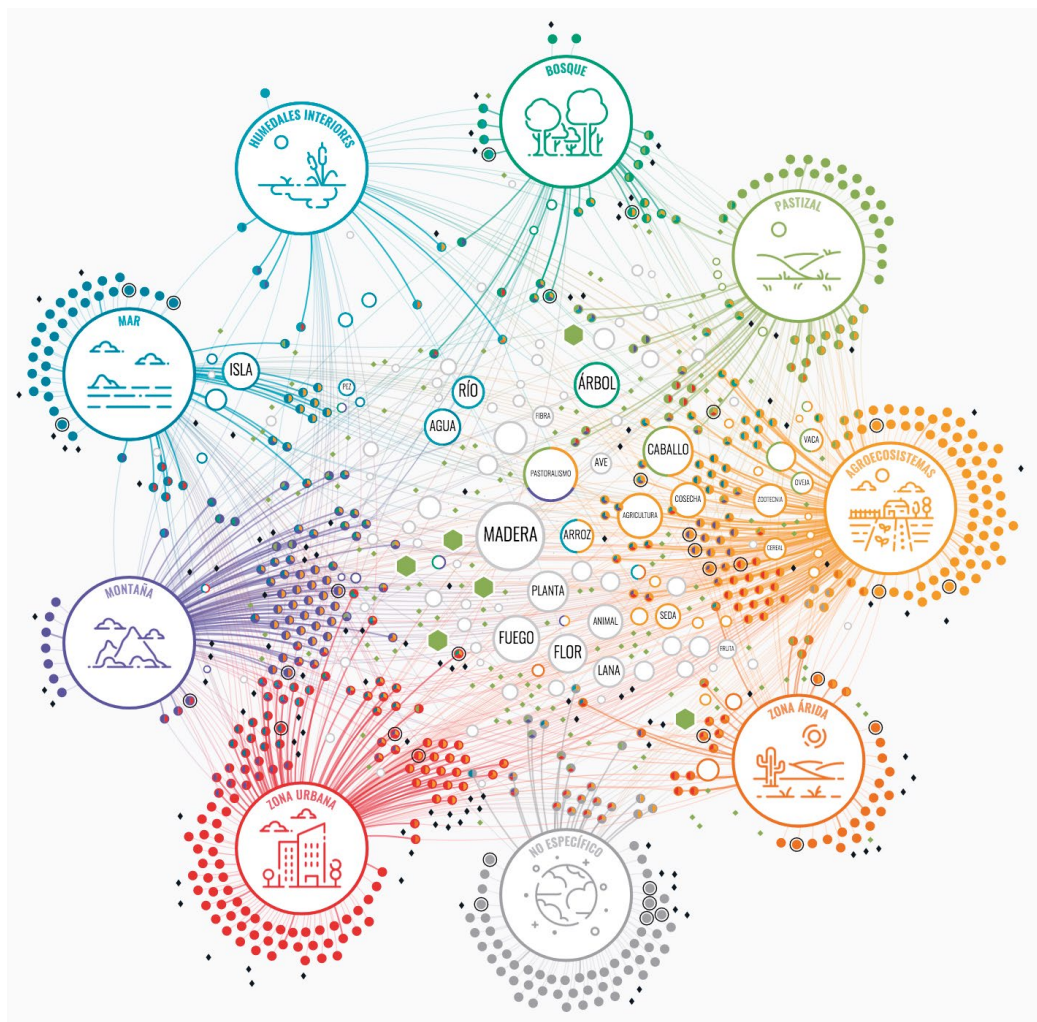
5.2. ¿Qué es la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial?

La definición de PCI (artículo 2.1. de la Convención) viene acompañada de otro concepto fundamental: el de “salvaguarda”, que sustituye al concepto de “protección”. La convención propone una idea renovada de salvaguarda a la que todavía pocos gestores y expertos en la materia se han habituado: la necesidad de transmisión y de continuidad.

Se entiende por “salvaguarda⁵”, tal y como se recoge en el artículo 2.3.:

“Las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión —básicamente a través de la enseñanza formal y no formal— y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos” (UNESCO 2003, 3).

Relación entre patrimonio inmaterial y socioecosistemas en los elementos inscritos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (LRPCIH) (UNESCO 2018)

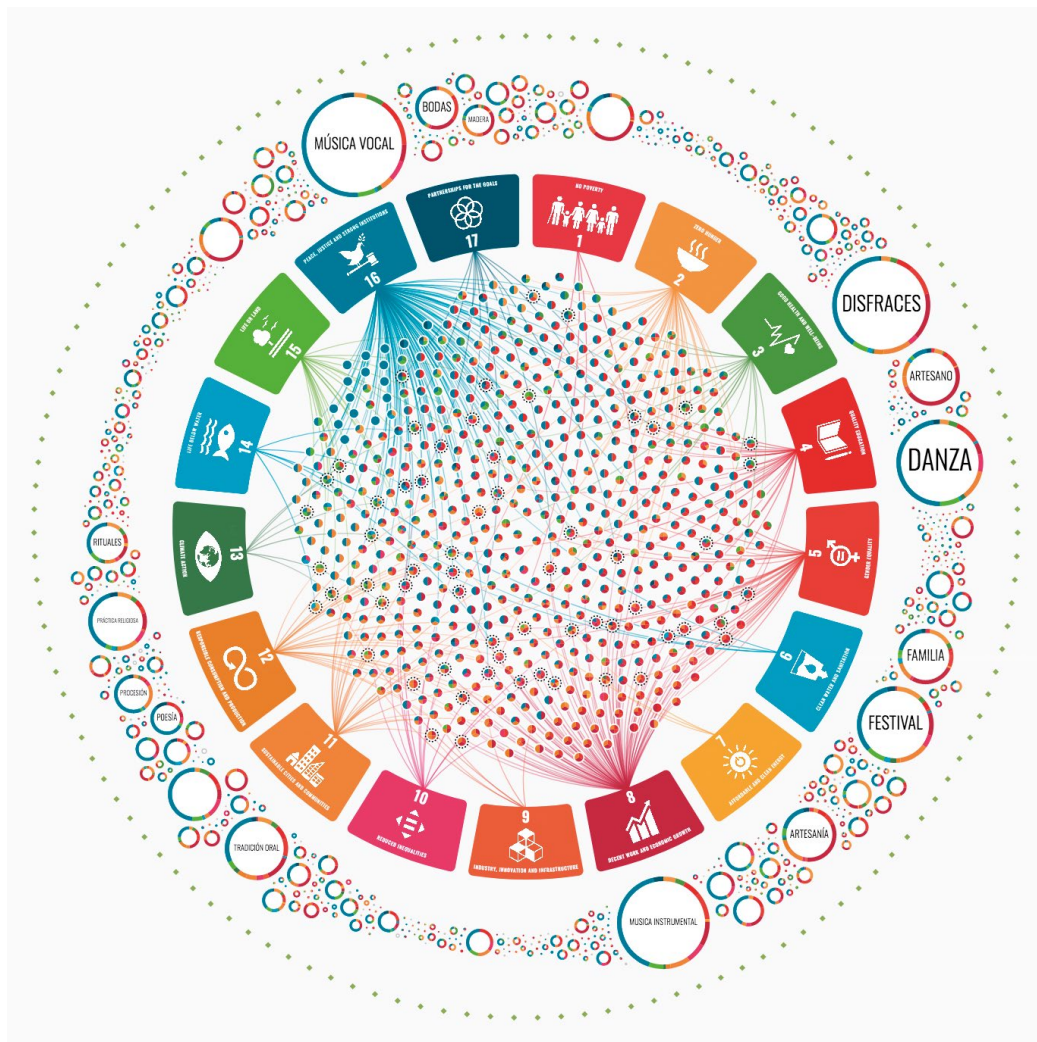


Aunque antes también existiera una concepción antropológica del patrimonio que había comportado un cambio de enfoque desde la anterior idea estática de los objetos a una más dinámica de los procesos culturales y contextos en los que estos se producen, la Convención introduce un concepto de salvaguarda que no se limita al conocimiento y la documentación de prácticas culturales u objetos asociados. Esta va dirigida a permitir la creación y reelaboración cultural necesarias para la continuidad de las prácticas, reforzando, de esta forma, la necesaria dinámica cultural.

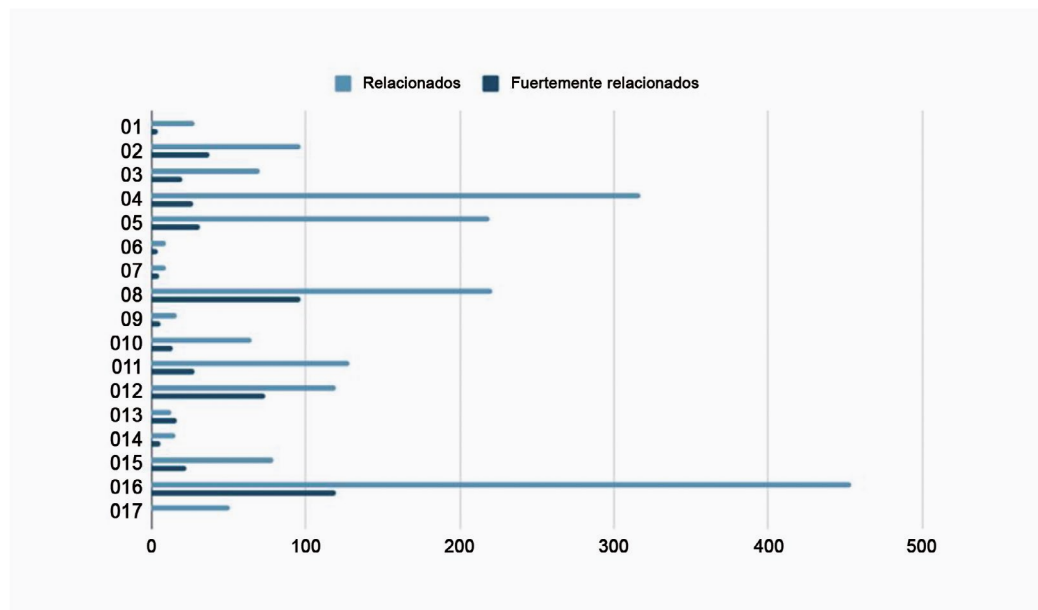
Pero esto significa ampliar la mirada y el campo de actuación, convirtiendo a este patrimonio en principio rector de las políticas públicas. Salvaguardar el PCI implica poner en marcha políticas y operaciones indirectas (sociales, ambientales, económicas, educativas, urbanísticas, de agricultura, de pesca, de artesanía...) que permiten a los grupos reproducir la práctica en cuestión (Kurin 2007), no por una cuestión meramente nostálgica, sino porque la salvaguarda de la diversidad cultural garantiza también la biodiversidad y el desarrollo social.

La UNESCO (2018) ha realizado un esfuerzo por relacionar los elementos inscritos en sus listas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobados por la ONU en 2015. En 2017 la Sección del Patrimonio Cultural Inmaterial comenzó a estudiar las posibilidades de indexar los elementos de las listas a través de conceptos de su Tesaurus. Se indexaron los elementos estableciendo relaciones de estos con los ODS siendo las relaciones más destacables las establecidas con los ODS 16, 8, 5 y 4, como puede apreciarse en el gráfico de la página 41.

Relación de los elementos de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (UNESCO, 2020)



Número	Denominación
ODS1	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS2	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
ODS3	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
ODS4	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
ODS5	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
ODS6	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
ODS7	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
ODS8	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
ODS9	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
ODS10	Reducir la desigualdad en y entre los países
ODS11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
ODS12	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
ODS13	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
ODS14	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
ODS15	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica
ODS16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
ODS17	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible



Frente a la Recomendación de 1989 que se dirigía sobre todo a los expertos para el necesario conocimiento e inventario de estas prácticas, convirtiendo a las prácticas culturales en productos u objetos tangibles susceptibles de ser archivados o expuestos, ya sea para la investigación o para la difusión al gran público, la Convención de 2003 se dirige a las instituciones para que sostengan y promuevan la creatividad, el protagonismo y la participación de los actores sociales vinculados con este patrimonio, así como su identificación y el diseño de medidas de salvaguarda.

No obstante, tanto los mecanismos de protección patrimonial vigentes, como los profesionales y las instituciones del patrimonio, así como los agentes sociales que producen y reproducen estas expresiones culturales, encuentran grandes dificultades para diseñar y aplicar las acciones de salvaguarda y de gestión desde esta mirada amplia que propone la Convención (Bortolotto 2014, 7; Carrera Díaz 2009).

La “salvaguarda” es un proceso metodológico que comprende la identificación, investigación y definición de acciones específicas para permitir que las manifestaciones culturales consideradas PCI se mantengan vigentes en cuanto pertinentes para una cultura.

5.2.1. El sistema de listas

Más allá de los valores, principios y normas que establece este texto, se optó por crear un sistema de listas: Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y Lista de Salvaguardia Urgente y un Registro de buenas prácticas de salvaguardia. Entre todos los instrumentos, el más empleado por los Estados es la Lista Representativa. Actualmente, sus listas recogen información sobre las características y programas de salvaguarda de 584 elementos del PCI de 130 países.

La idoneidad de darle prioridad a la creación de listas fue ampliamente debatida durante la negociación de la Convención (Aikawa-Faure 2009) y se convirtió muy pronto en uno de los puntos débiles de la Convención para el debate antropológico. Ya resultaba arbitraria y artificial la dicotomía creada entre patrimonio material e inmaterial (Limón Delgado 1999; Herzfeld 1997). Además, el recurso de las listas se considera una forma de simplificar la cultura y tecnocratizarla.

La creación de listas ha tenido consecuencias políticas, sociales y cognitivas, pues esta abstracción de la realidad (bienes inscritos), legitimada por algún tipo de poder, se convierte en una forma posible de manipulación política y social (Bortolotto, Chiara y Severo 2012). Las listas, lo más visible de la Convención, constituyen una abstracción prescriptiva de la realidad que está acarreando consecuencias muy negativas para el conocimiento; y, siendo legitimadas por distintas estancias (en este caso, poderes políticos y económicos), comportan formas de manipulación evidente (Bortolotto 2014).

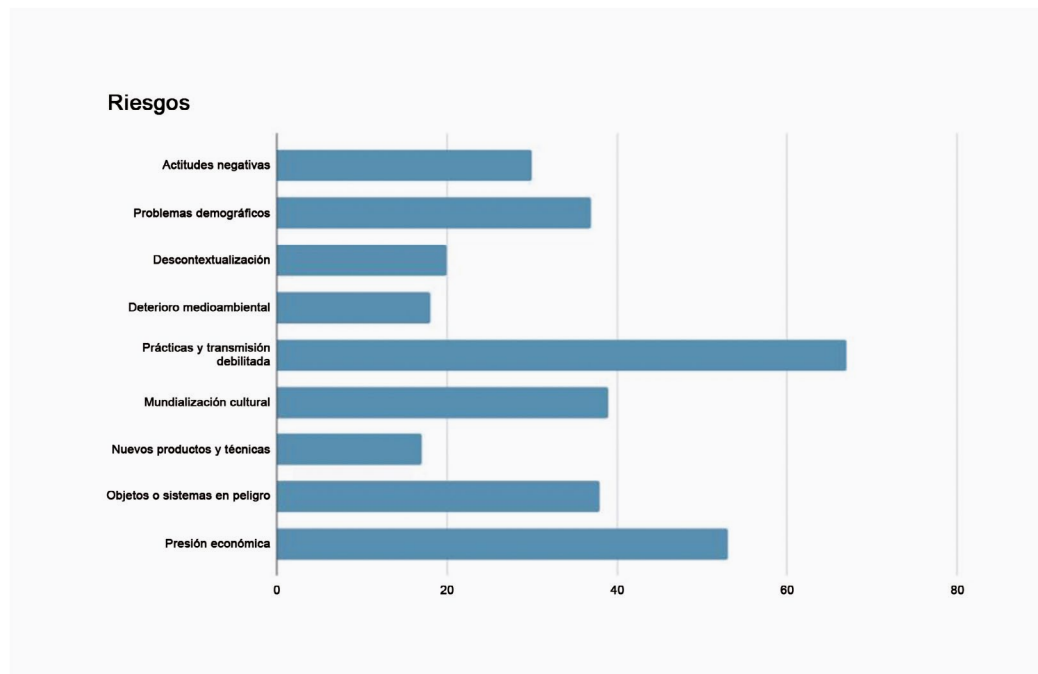
5.2.2. El Inventario

Una de estas medidas debe ser la de identificar y definir los distintos elementos del PCI presentes en el territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

En el artículo 12 de la Convención se destacan los inventarios como herramientas de identificación del PCI. Cada Estado parte confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del PCI presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán regularmente. El inventario se convierte no en un fin en sí mismo, sino en un medio de identificación para la consecución de la salvaguarda, entendida fundamentalmente como transmisión y continuidad (Bortolotto 2008, 22).

Fijar en un inventario formas y significados sin tener en cuenta lo efímero de unas y de otros puede ser un riesgo por quienes se aferran a una idea de tradición conservadora y no procesual. Este nuevo modelo de salvaguarda relacionado con el PCI no afecta a los objetos, sino a los procesos de reproducción y transmisión a las nuevas generaciones.

Riesgos más comunes en los elementos de la LRPCIH. UNESCO (Elaboración propia)



El inventario, lejos de ser el fin de la política de salvaguarda, se convierte en un medio de identificación para la detección de riesgos (véase capítulo 11) y la puesta en marcha de eventuales medidas de salvaguarda que permitan la transmisión y continuidad de las prácticas dentro de los contextos en los que tradicionalmente estas se producen (Bortolotto 2008, 22). Antes de crearse una foto fija, el proceso de inventario debe adaptarse a estas exigencias, contemplando el dinamismo de estas expresiones. La falta de holismo y una visión estática y objetual del patrimonio puede conducir a una desconsideración o descoordinación entre organismos competentes y otras Administraciones (medioambiente, obras públicas, turismo...), así como con la ciudadanía y los movimientos sociales que repercute negativamente en el PCI.

Relación de riesgos y elementos de la LRPCIH relacionados. UNESCO (Elaboración propia)

Categorías de riesgos	Subcategorías de riesgos	Elementos relacionados
Actitudes negativas	Conflictos	30
	Políticas represivas	
	Intolerancia	
	Falta de respeto	
Problemas demográficos	Éxodo rural	37
	Deterioro del hábitat	
	Afluencia de población	
Descontextualización	Turistificación	20
	Teatralización	
	Fosilización	
	Comercialización abusiva	
	Apropiación abusiva	

Deterioro medioambiental	Ganadería intensiva	18
	Explotaciones mineras	
	Deterioro del Ecosistema	
	Desastre natural	
	Desarrollo urbano	
	Deforestación	
	Contaminación del agua	
	Cambio climático	
Prácticas y transmisión debilitada	Disminución de la participación	67
	Disminución del interés de los jóvenes	
	Edad avanzada de los practicantes	
	Pocos practicantes	
	Pérdida de significado	
	Reducción de la práctica	
	Reducción del repertorio	
	Transmisión insuficiente	
Mundialización cultural	Transmisión interrumpida	39
	Cambios socioculturales bruscos	
	Estandarización de la educación	
	Medios de comunicación de masa	
	Medios sociales	
Nuevos productos y técnicas	Nuevas diversiones	17
	Introducción de nuevas tecnologías	
	Producción industrial	
Objetos o sistemas en peligro	Introducción de materiales modernos	38
	Pérdida de conocimientos	
	Pérdida de elementos materiales	
	Pérdida de espacios culturales	
Presión económica	Pérdida de lengua	53
	Formación difícil	
	Injerencia en los recursos alimentarios	
	Recursos financieros insuficientes	
	Remuneraciones insuficientes	
	Transformaciones económicas bruscas	



Carnaval, Tlaxcala, México, 2015
(Gema Carrera Díaz)



Danza, Granada, Nicaragua, 2010
(Gema Carrera Díaz)

5.3. La participación de las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos en la identificación y salvaguarda del PCI

Otra novedad de la Convención de 2003 es la integración de la sociedad civil y la participación social en la construcción, identificación y salvaguarda del PCI. Por otra parte, completamente lógico cuando nos referimos a manifestaciones culturales vivas protagonizadas y salvaguardadas por sus propios detentadores, algo que proviene tanto de la influencia de la perspectiva del *public folklore* americano (Bortolotto 2007) y de la tendencia actual hacia el “buen gobierno” o “gobernanza”, como de una forma de amortiguar la falta de legitimidad del Estado. Ello también procede de la participación de las comunidades indígenas en el derecho internacional relacionado con la protección medioambiental o los derechos humanos y que, poco a poco, se ha integrado en el ámbito de las políticas culturales.

La importancia de la comunidad para la identificación y salvaguarda del PCI es fundamental en la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003. La propia definición del PCI se hace en relación a la relevancia identitaria para la comunidad, grupos o individuos (artículo 2.1.); la comunidad debe participar en los procesos de identificación y definición de su PCI (artículo 11.b); en el marco de sus actividades de salvaguarda del PCI, cada Estado parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo (artículo 15). Esta es una obligación vinculante para los Estados que hayan ratificado la Convención.

Sin los colectivos que se identifiquen con él, no existe patrimonio. Pero ¿qué colectivos son los protagonistas?, ¿quiénes activan los procesos de patrimonialización?, ¿cómo se participa en la creación de un inventario?, ¿cómo se puede incentivar la continuidad de ciertas expresiones culturales si las normativas en torno reman en sentido contrario?, ¿cómo pueden los pescadores, campesinos, agricultores, ganaderos o productores agroalimentarios, artesanas y artesanos seguir transmitiendo sus saberes en el contexto global?

Y, por otro lado, ¿cómo se delimitan las comunidades? En marzo de 2006 se celebró en Tokio una reunión de expertos para elaborar recomendaciones sobre la definición de las comunidades y los grupos en el contexto de la Convención; en la definición, la localización y el inventario de su PCI; el modo de asegurar la participación más amplia posible de las comunidades y los grupos en las actividades de salvaguarda; las maneras en que el PCI puede servir de factor que impulse el desarrollo. En esta reunión se definió la “comunidad” como “redes de personas que comparten un lazo o un sentimiento de identidad a partir de una relación histórica compartida y que radica en la práctica y transmisión, o apego, a su PCI” (UNESCO 2006). Asimismo, los “Grupos” “comprenden personas dentro de comunidades que comparten características como habilidades, experiencias y conocimientos especiales y pueden realizar funciones específicas en el presente y el futuro mediante la práctica, creación y/o transmisión de su PCI como, por ejemplo, preservando la cultura como profesionales o aprendices” (UNESCO 2006).



Elaboración artesanal de cal, Tetuán, Marruecos, 2014 (Gema Carrera Díaz)



Mujer lavando ropa en el lago de Nicaragua, 2010 (Gema Carrera Díaz)

No obstante, esta idea de comunidad y el rol que realmente desempeña tiene varias contrapartidas, que hacen menos creíble a la Convención (Bortolotto 2008, 34; Carrera Díaz 2016, 2017b) y que constituyen algunas de las claves a la hora de diseñar esta propuesta metodológica para la realización de planes de salvaguarda del PCI como acuerdo social.

Este reconocimiento de la sociedad civil es más cosmético que real. Las “comunidades” son heterogéneas y no están tan cohesionadas como pretenden los formularios de la UNESCO para cumplir con sus principios y directrices operativas. El conflicto es consustancial al patrimonio y no considerarlo puede convertirse en un problema. Las tensiones y desequilibrios de poder en el interior de las comunidades pueden implicar conflictos de apropiación simbólica contrapuestos, sobresaliendo algunas voces sobre otras si no se realiza un adecuado mapa de actores (capítulo 14). A veces,

las comunidades pueden no estar reconocidas por su propio Estado; o son apoyadas por un grupo o representante no afín al gobierno regional/ autonómico responsable de guiar la candidatura, o del estatal, responsable de elevarla a la UNESCO. Razones todas ellas que manifiestan el riesgo evidente de instrumentalización política. Como veremos en el capítulo 10, las comunidades, a veces, son demasiado genéricas y representan a todo un país o a varios países. En estos casos, los procesos de patrimonialización suelen ser activados por instituciones y la participación es difícilmente demostrable, quedándose en una declaración parcial y formal de algunos representantes. Se presenta una comunidad tan amplia como la “andaluza-extremeño-murciana” o la mediterránea. Se trata, normalmente, de candidaturas verticales, que hacen campañas para conseguir “comunidad”. Otras veces, las comunidades reales son informales y no están organizadas para participar en los procesos de salvaguarda y, por el contrario, las ONG formales, que sí reconoce la UNESCO, pueden no ser representativas de las comunidades.

6. Conclusiones

Este análisis de la salvaguarda del PCI en el ámbito internacional que ya desarrollara en mi trabajo de tesis doctoral (Carrera Díaz 2016) nos permite confirmar la continuidad de algunos de los problemas fundamentales que se producen en el ámbito de la gestión relacionados con el patrimonio cultural en general y el PCI en particular, derivados de posiciones reduccionistas de diferente tipo: esencialistas-inmateriales, materialistas-objetuales y mercantilistas-instrumentales.

Después de treinta años de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (1972) y de reflexión sobre el eurocentrismo y el desequilibrio global presente en su primera Convención, la UNESCO nos aporta una reformulación del concepto de *salvaguarda* y aboga por una gestión del patrimonio mucho más participativa, centrada en las “comunidades” y sus conocimientos. Deja sin protección, y en manos de la OMPI, las cuestiones mucho más lucrativas, relacionadas con la protección de la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales.

Por otro lado, la UNESCO recalca con el término “inmaterial” una dicotomía ya superada de patrimonio material-inmaterial, nada positiva para una gestión holística e integradora del patrimonio.

Instaura también el sistema de listas, al igual que la otra Convención, intentando con esto aumentar en sus listas la representación de la diversidad cultural del planeta (resultado de la Estrategia Global) y de los territorios menos representados en la otra lista (África, América Latina). O bien podríamos interpretar esta estrategia global como un modo de introducir nuevas “mercancías”, turistizando y mercantilizando las culturas que supuestamente se pretenden salvaguardar. Los sujetos se cosifican, se exponen interpretándose a sí mismos, convirtiéndose en artefactos metaculturales (Tesoros Humanos Vivos) que compiten por generar interpretaciones de sí mismos susceptibles de ser reconocidas como patrimonio inmaterial (Kirshenblatt-Gimblett 2004; Pacheco Habert, Fuentes Riquelme y Henríquez Zúñiga 2011; Santamarina Campos 2011, 2013; MacCannel 2003, 2007; Sánchez-Carretero 2005). El consumo de lo “auténtico” y el *marketing experiencial* (Schmitt 1999) explican la inflación patrimonial de los bienes “inmateriales” que permite hacer frente a las consecuencias de la terciarización económica actual y a la explosión del turismo a escala global, incluyendo a otros continentes con culturas “más exóticas” en el mercado internacional (Santamarina Campos 2013).

Sin lugar a dudas, la *mercantilización*, espectacularización o turistización y uso político de los bienes culturales, incluyendo vertiginosamente al denominado “patrimonio cultural inmaterial”, es uno de los fenómenos actuales que más afectan a la cultura y al patrimonio inmaterial.

En definitiva, para la salvaguarda del PCI desde una perspectiva menos eurocéntrica y colonial, la UNESCO debería adaptar sus directrices operativas contemplando las diferencias culturales y lingüísticas de los Estados miembros y su diversidad cultural interna. Sin menoscabo de la participación social, sino, antes al contrario, para garantizarla, debería hacer mayor hincapié en la participación de especialistas (en antropología) con capacidad de poner a la comunidad, en toda su heterogeneidad, en el centro, aplicando un concepto antropológico y no humanístico de cultura y atendiendo a la complejidad de los elementos, sin jerarquizar entre creatividad individual y

colectiva; antigüedad o contemporaneidad; arte o artesanía; objetos artísticos frente a procesos sociales y conocimientos; singularidad y representatividad; perpetuidad o dinamismo.

Notas

1. La Estrategia global para una Lista del patrimonio mundial equilibrada, representativa y creíble fue aprobada por el Comité del Patrimonio Mundial en su 18.^a reunión celebrada en 1994. Disponible en: <http://whc.unesco.org/archive/global94.htm> [Consulta: 15/06/2021].
2. Las “Folklore Society” nacen en el último tercio del siglo XIX en toda Europa.
3. En 1982, la UNESCO y la OMPI elaboran las “Disposiciones Tipo” para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas como una forma de protección *sui generis*. Entre 1998 y 1999 la OMPI realizó el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Autóctonos y los Principios y las Directivas para la Protección del Patrimonio de las Poblaciones Autóctonas. Las razones que aportaba la OMPI para regular y proteger los Conocimientos Tradicionales (CCTT) por medio de la Ley de propiedad intelectual eran, sin tapujos, fundamentalmente de tipo económico, afirmando que estos conocimientos son valiosos para el diseño, el sector farmacéutico, agropecuario e industrias de biotecnologías; así como que los poseedores de los conocimientos deben participar en los beneficios económicos generados por la explotación de los mismos. Así, uno de los objetivos de las misiones exploratorias de la OMPI era “sensibilizar acerca del valor comercial potencial de los conocimientos tradicionales y crear instrumentos para calcular ese valor”. A partir de los años noventa la OMPI regula los “recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore”, creándose en el año 2000 el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore.
4. Del 27 al 30 de junio de 1999 se realizó en Washington, D.C. (EEUU) la Conferencia Internacional “Evaluación Global de la Recomendación sobre la Protección del Folclore y la Cultura Tradicional, de 1989: Potestación Local y Cooperación Internacional”. Disponible en: http://www.folklife.si.edu/resources/Unesco/finalreport_spanish.htm [Consulta: 15/06/2021].
5. Las medidas de salvaguarda se especifican en los artículos 11, 12 y 13 de la Convención.